

Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Valencia

Plaza DEL TURNO DE OFICIO, 1 , 46013, València. Tlfno.: 961929064, Fax: 961929364, Correo electrónico: vaco01_val@gva.es

N.I.G.: 4625045320240002338

Procedimiento: Procedimiento abreviado 241/2024. Negociado: C

Actuación recurrida: RESOLUCION EXPRESA

De: D
Procu
Letrado/a Sr./a.: D

Contra: DIPUTACION DE VALENCIA

Procurador/a Sr./a.:

Letrado/a Sr./a.: Servicio Jurídico de la Diputación Provincial de

Valencia/València

SENTENCIA N.º 249/2024

En València, a diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos por mí D^a MILAGROS LEÓN VELLOSILLO, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n º 1 de Valencia, los presentes autos de Procedimiento abreviado seguidos ante este Juzgado con el número 241/2024, a instancia de

representada por el Procurador y asistido de Letrado

contra la Resolución del Jefe de Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación de Valencia n°213043-04APR-24 por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la recurrente contra la providencia de apremio por el concepto de IBI del periodo 2023con n° de referencia 005329343944 por un importe de quinientos noventa y dos con dieciocho euros (592,18 euros) . Ha sido parte demandada la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA DE Valencia, representada y asistida de su Letrado, , y en



ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Por el citado particular se formuló demanda en la que, tras exponer los hechos y fundamentos legales que estimó oportunos en apoyo de su pretensión, terminó suplicando que se dictara sentencia estimatoria del recurso, en la que se declarase contrario a derecho el acto recurrido, con imposición de costas a la contraria.

SEGUNDO. - Admitida la demanda por Decreto de veintiséis de julio de dos mil veinticuatro previa reclamación del expediente administrativo. Se señalo vista para el día trece de diciembre de dos mil veinticuatro. En la vista formularon las partes sus alegaciones. La administración demandada contestó, interesando la administración la desestimación del



recurso; practicándose la prueba documental por reproducción de los aportados por las partes y el expediente, que obran unidos a las actuaciones. Una vez practicadas las pruebas quedaron las actuaciones pendientes de sentencia.

TERCERO. - En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

ENTOS DE DERECHO

PRIMENCE. Es cepto de com mas ma Resolución del Jefe de Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación de Valencia n º 213043-04APR-24 por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la recurrente contra la providencia de apremio por el concepto de IBI del periodo 2023con n º de referencia 005329343944 por un importe de quinientos noventa y dos con dieciocho euros (592,18 euros).

La parte actora alega en defensa de su derecho que es titular tan solo del 23,37 % de la titularidad del inmueble Se ha vulnerado el art 35 de L.G.T, y no se ha procedido a la notificación a cada uno de los propietarios.

La administración demandada se opone por los motivos que constan en el acta.

SEGUNDO. – Dos son los motivos de esta litis en primer lugar Dispone el art 167 de l. C. T. 59/2002 de 17 de diciembre 1. El procedimiento de apremio se inicieré mediente prio en la que se identificará le deud argos a los que se renere el artículo 28 de esta ley y se le requerra para que electue el pago.

- 2. La providencia de apremio será título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios.
 - o sólo serán admisib<mark>les los siguien</mark>



- b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.
- c) Falta de notificación de la liquidación.
- d) Anulación de la liquidación.
- e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.





4. Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro del plazo al que se refiere el apartado 5 del artículo 62 de esta ley, se procederá al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de apremio.

Consta en el EA, el Decreto3918 de 30/3/2023 por el que se aprobaron los padrones fiscales para el año 2023 del IBI. Consta el recibo del impuesto (IBI 2023), en el que se hace constar la existencia de seis titulares y que el mismo no ha sido pagado por los contribuyentes. Consta la notificación a la mercantil AR URB RIUS NORTE, siendo la legal representa de conformidad con art. 14 ley 39/2015 1. Las per persona jurídica de conformidad con art. 14 ley 39/2015 1. Las persona persona persona para comunican con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.

2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos a) Las personas jurídicas.

Se notifica a la recurrente en el DHUE, y la recurrente accede el 5/2/2024. La notificación del pago del periodo impositivo del impuesto para el año 2023 se realiza de forma coclectiva de conformidad con el art 77.4 TRLHL 4. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los supuestos en que, de conformidad con los artículos 65 y siguientes de esta ley, se hayan practicado previamente las notificaciones del volor cotactral y base liquidable previetas en los procedimientos de valoración colectivo.

ción previsto en las citadas petificaciones perunentes, se entenderán consentidas y mines has oases importore y requidable notificadas, sin que puedan ser objeto de nueva impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto.

En consecuencia, se desestima el primer motivo de oposición. La deuda en concepto de IBI 2023 se ha notificado a la recurrente de forma colectiva, que siendo un tributo periódico no hay obligación de notificar de forma personal, y posteriormente ante el impago de la misma se la ha notificado personalmente la providencia de apremió, todo ello se ha realizado de construir que motivo de impagnación nente a la providencia de apremió.



TERCERO. – El segundo motivo es la existencia de diversos cotitulares como sujetos pasivos del impuesto. Ello nos lleva a aplicar el art 35.7 de LGT 7. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de solidaridad distintos del previsto en el párrafo anterior.

Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda la división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho trasmitido.



El régimen de responsabilidad en materia tributaria es diferente al de la responsabilidad civil, donde no se presume la solidaridad. Si se presume la solidaridad en las obligaciones tributarias por ello a cualquiera de lo cotitulares se les puede exigir la deuda tributaria,

Por todo ello el acto administrativo es ajustado a derecho debiendo la recurrente proceder al pago de la deuda reclamada, sin perjuicio de su derecho de repetición frente a los demás titulares del inmueble. No pudiéndose reabrir el plazo en periodo voluntario al ser un tributo perió cer, al ser titular de un inmueble. No pudiendo la administración tramita gislación.

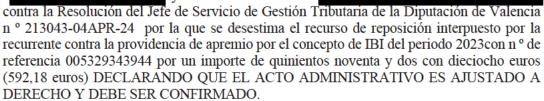
El recurso se desestima

CUARTO.- Finalmente, cabe señalar que, de conformidad con lo que aparece previsto en el párrafo 1º del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según el cual: "en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho", las costas causadas en la tramitación del presente procedimiento correrán a cargo de la parte demandante, con el límite máximo de trescientos setenta y cinco (375) euros, más el IVA correspondiente en su caso, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del aludido precepto y del principio de moderación

s los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D
representada por el Procurador D
y asistido de Letrado D
ontra la Resolución del Jefe de Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación de Valencia



Se imponen las costas al recurrente.

Notifiquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que de conformidad con art 81 de L.J.C.A. la anterior Resolución es firme y no cabe recurso contra ella.





VALENCIANA

Llévese el original al Libro de Sentencias.

Por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo; Dª. MILAGROS LEON VELLOSILLO, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valencia.

